

“No podemos exigirle a la agenda Gobierno-Farc lo que nos toca construir como sociedad”

Entrevista a Rocío Londoño. Doctora en Historia de la Universidad Nacional, socióloga de la Universidad Javeriana

Por Jaime Wilches

Coordinador - Línea de Investigación en Memoria y Conflicto del Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano de la Universidad Distrital - IPAZUD

Jaime Wilches (J.W): El gobierno Santos abrió las puertas para buscar una salida negociada al conflicto armado en Colombia y entre los puntos fundamentales de discusión está la posibilidad de participación política de los integrantes de las Farc: ¿Cuáles son las condiciones que usted considera deben crearse para que esta posibilidad se convierta en una realidad?

Rocío Londoño (R.L): Primero lograr el acuerdo y como dice el texto preliminar que dio inicio a las negociaciones, no hay acuerdo mientras no haya acuerdo para ponerle punto final al conflicto armado. Esa es la condición fundamental para que sea posible que las Farc se conviertan en un movimiento político. Segundo, está pendiente la reglamentación del marco jurídico para la paz; supongo que esta reglamentación depende del avance de las negociaciones del gobierno con las

Farc. Tercero, mantener un adecuado clima político, si bien hay sectores, como el uribismo, que se oponen a las negociaciones y cuestionan la salida política aduciendo que la única solución es la vía militar.

En la opinión pública se nota cierto entusiasmo y un apoyo condicionado, con el razonable escepticismo que genera un conflicto tan prolongado como el colombiano y con el antecedente del fracaso de procesos de paz anteriores.

Un hecho positivo es la emergencia de organizaciones sociales que además de sus propias reivindicaciones, apoyan este nuevo esfuerzo de paz. En un trabajo que vengo realizando con el Centro de Memoria Histórica sobre el problema de tierras y la organización social en territorios involucradas en el conflicto armado interno, hasta el momento hemos detectado más de 680 organizaciones rurales, sin incluir las juntas de acción





comunal, un dato alentador y que permite pensar que hoy día existen mejores condiciones para la movilización social. Esto a su vez es un factor favorable para la creación de un clima propicio para la incorporación de las Farc y del Eln, a la vida política nacional.

Se ha dicho con cierta razón que el punto agrario, que es el primero de la agenda, es decisivo. Sin embargo, considero que es probable que el Gobierno y las Farc se pongan de acuerdo en aspectos importantes del desarrollo rural. Creo que la discusión sobre la participación política de las Farc puede ser más compleja, sobre todo en los puntos que tienen que ver con el Marco Jurídico para la Paz y la justicia transicional. Por ejemplo, en recientes declaraciones, las Farc han sido enfáticas en rechazar la Justicia transicional, una posición que seguramente tendrán que modificar.

(J.W): Distintos sectores políticos se oponen a la posibilidad de participación política de integrantes desmovilizados de las Farc: unos aseguran que esto abrirá la puerta a la impunidad; otros consideran que no se puede repetir el modelo que se implementó con ex combatientes del M-19 en 1991: ¿Qué opinión tiene frente a estas posiciones?

(R.L): Tengo entendido que el problema pasa por la discusión jurídica. No soy jurista, pero en este delicado asunto las opiniones están muy divididas.

Por ejemplo, Óscar Iván Zuluaga, ex ministro de hacienda y fiel seguidor del ex presidente Uribe, dice que aquí lo único legítimo es el cese al fuego unilateral, el desarme y la entrega de las Farc, posición que sostuvo a ultranza el anterior gobierno, bajo el supuesto de que con la política de *seguridad democrática* la guerrilla sería derrotada militar y políticamente. Si las conversaciones conducen a un acuerdo final entre el Gobierno y las Farc, no hay duda de que este pasa por el reconocimiento de la guerrilla como *actor* político, lo cual, a mi modo de ver, requeriría ir abandonando el lenguaje belicista y de agresión, tanto por parte de la guerrilla como del Ministro de Defensa.

Ciertamente, el no reconocimiento por parte de las Farc de los instrumentos jurídicos de la justicia transicional, que hacen parte del *marco jurídico para la paz*, aprobado por el congreso de la república en mayo de este año, puede hacer aún más difícil un acuerdo de punto final. En mi opinión, las Farc no deberían seguir justificando la lucha armada por su origen y su trayectoria histórica. Pero una posición reflexiva y autocrítica de la guerrilla no solo toma tiempo sino que depende del éxito de las negociaciones. También hay que decir que tanto la *Verdad histórica* como la *Verdad jurídica* son piezas muy complejas de cualquier negociación de paz. Por más voluntad de paz de las partes enfrentadas, habrá versiones distintas, e incluso contrapuestas, de las razones y los hechos que dieron lugar a este largo y cruento conflicto.

En medio de los extremos, hay posiciones que parecen más sensatas y adecuadas a nuestra situación. Por ejemplo, aquella que



considera que, no obstante las disposiciones de la Corte Penal Internacional, los gobiernos tienen un margen de autonomía, siempre y cuando exista la probabilidad de un acuerdo de paz, es decir, que los instrumentos jurídicos pueden subordinarse a decisiones políticas en la medida en que el interés por la paz es de primer orden, no solo para los directamente involucrados en el conflicto armado, sino para la sociedad y el país en su conjunto. Ese es un punto clave, sobre el cual considero conveniente buscar puntos de acercamiento y de conciliación, y no radicalizar las posiciones.

(J.W): Los líderes paramilitares también han cuestionado el proceso y piden participar en la mesa de negociación: ¿Es viable esta petición?

(R.L): Esa idea la empezó a promover Salvatore Mancuso con una carta enviada al gobierno y luego Piedad Córdoba, quien proponía incluirlos como parte de las actuales negociaciones.

En Colombia queremos que todos los problemas se resuelvan de un día para otro. Aparece una agenda de pocos puntos y relativamente concreta y aunque inicialmente se celebra, luego todo el mundo empieza a pedir más, a sabiendas de que la agenda de la Habana no puede solucionar todos los problemas nacionales.

Hay que insistir en que esta es una agenda circunscrita a asuntos que el gobierno y las Farc consideran fundamentales para llegar a un acuerdo final. Los voceros de ambas partes han dicho que habrá participación de otros sectores, incluso ya anunciaron un primer mecanismo de participación ciudadana para el debate sobre el primer punto de la agenda. Otros vienen insistiendo en la participación del Eln. Al parecer, el gobierno ya está estableciendo contactos con este grupo.

Al respecto, no se debe olvidar que las historias de las Farc y el Eln son muy distintas, que cada grupo tiene su propia agenda y su propia plataforma ideológica y que incluso se han enfrentado de manera violenta en algunas regiones. Poner a las Farc y el Eln en la misma mesa tal vez sería apresurado, y haría la discusión mucho más difícil y compleja, más aun en un proceso que todavía es muy débil e incipiente.

(J.W): Si bien la agenda está diseñada por actores muy concretos: ¿No termina siendo excluyente frente a otros sectores sociales que quieren participar?

(R.L): El asunto no radica en la cantidad de actores que participen, sino en los canales de participación que se acuerden entre los voceros de ambas partes. Esa idea de que para participar hay que tener presencia en la mesa de la Habana no es sensata y puede llegar a ser oportunista. La lección del Caguán es contundente. En esa época se veía una multitud de organizaciones y personas desfilando y con ganas de figurar en los medios de comunicación. Después de tantas opiniones y discusiones, nadie asumió la ardua tarea de resumir las propuestas y eso finalmente se perdió. No conozco ningún trabajo académico que haga una recopilación y un análisis de la participación ciudadana en las mesas del Caguán.

Los diálogos que están en curso en la Habana, se han caracterizado hasta ahora por ser más discretos, realistas, ordenados y enfocados a resolver problemas claves que conduzcan a ponerle punto final al conflicto armado. Considero que las propuestas de la *sociedad civil* deben ser viables y no pecar de maximalismo. Es importante la participación no solo de las organizaciones sociales y las instituciones académicas, sino también



de los gremios económicos, los partidos políticos y otras instituciones.

(J.W): La exposición y pantallazo de algunos personajes se debe a la influencia de los medios de comunicación: ¿Qué papel jugarán estos actores en este nuevo intento por la paz?

(R.L): Creo que en muchos casos, los periodistas no obran de mala fe, sino que tal vez por falta de suficiente conocimiento del conflicto cometen errores o hacen énfasis en aspectos o noticias triviales o poco relevantes desde el punto de vista público. Es preocupante que frente a asuntos complejos no se confronten o contrasten opiniones distintas y no se contextualicen adecuadamente ciertas noticias; también preocupa la superficialidad de no pocas de las noticias que han aparecido sobre los diálogos de la Habana. En la prensa escrita se nota a veces un cubrimiento más equilibrado y un esfuerzo por propiciar el debate y la reflexión sobre las repercusiones de este importante hecho político. Las dos partes de la negociación han sido cautelosas y saben que cualquier frase *fuera de lugar*, puede dar lugar a polémicas innecesarias o a malinterpretaciones.

(J.W): Retomemos el tema de las repercusiones de la negociación. Algunos integrantes del secretariado de las Farc no confían en la participación política por el antecedente del genocidio de la Unión Patriótica a finales de la década de los ochentas y comienzo de los noventas. ¿Considera que este argumento es válido o es una excusa de las Farc para resistirse a dejar las armas y entrar en el terreno de las ideas para proponer su modelo social?

(R.L): Creo que las Farc tienen un interés genuino en una negociación, así ésta sea muy

difícil. La confianza en un proceso como el de la Habana se construye día a día y pacientemente; y por supuesto tiene muchos escollos y enemigos. Eso ha pasado con procesos de paz no solo en Colombia, sino en otras partes del mundo, que finalmente han culminado con relativo éxito.

En Colombia existen antecedentes, no solo el drama de la UP, que explican en parte la desconfianza de las Farc frente al gobierno. Recordemos, por ejemplo, el acuerdo de paz de las guerrillas liberales y comunistas con Rojas Pinilla en 1953; al año siguiente el General ilegalizó al partido comunista y montó operativos militares para acabar con poblaciones que simpatizaban con los comunistas. Tal es el caso de la denominada “guerra contra Villarrica”. Este y otros casos, han hecho que las guerrillas, que entonces eran en realidad autodefensas campesinas, y los grupos insurgentes, surgidos en los años 60 y 70, se resistan a entregar las armas y a *desmovilizarse*, mientras no vean una coherencia entre la retórica oficial y la práctica de los agentes de Estado. Pero sabemos que sin dejación de las armas no es posible la paz.

En este caso, como en otros, la confianza se irá ganando en la medida en que avancen las conversaciones y se logren acuerdos parciales en función del acuerdo final. Por supuesto que habrá disidentes y opositores, no solo en las filas de la guerrilla sino en sectores del gobierno y del *establishment*. Es ingenuo pensar que si hay un acuerdo de paz, todas los integrantes de las Farc van a acatarlo, aunque cabría esperar que la dirigencia y gran parte de la base estén decididas a lograr y a acatar un acuerdo de punto final. No hay que olvidar, sin embargo, que el manejo del *posconflicto* puede ser aun más difícil que el de un proceso de paz, no solo por eventuales disidencias en la guerrilla sino





por acciones de sabotaje de la extrema derecha y por la existencia de poderosas bandas criminales ligadas al narcotráfico, y de grupos paramilitares, que todavía operan en no pocas zonas del país.

Como algunos analistas han dicho, que el negociador principal de las Farc sea Iván Márquez, identificado como el jefe del ala más radical de las Farc, y que el Gobierno haya incluido entre sus voceros al General Jorge Enrique Mora, caracterizado como de la “línea dura” del Ejército, y al General Naranjo, hasta hace poco director de la Policía Nacional, permite pensar que si bien las discusiones pueden ser sumamente álgidas, en caso de llegarse a un acuerdo éste tendría bases más sólidas. Es dable pensar asimismo que los actuales negociadores de ambas partes pueden generar cierta confianza, tanto en las filas de las Farc como de las Fuerzas Armadas, lo cual es crucial para el manejo de posibles disidencias y sabotajes a este proceso.

(J.W): Es importante que estén negociadores representativos de la línea dura. Sin embargo, el discurso de Iván Márquez en Oslo -Noruega fue criticado por querer influir no solo en el modelo político, sino económico y militar del país. ¿Qué opinión le merece este discurso?

(R.L): Me parece que la reacción fue exagerada. Hay una actitud muy formalista de algunos analistas y medios de comunicación frente a

la agenda. Era predecible que las Farc no se iban a salir de su *libreto*. Yo interpreto el discurso de Márquez como el lanzamiento público de la plataforma ideológica de las Farc. Una plataforma en la que las Farc denuncian problemas sociales, económicos y políticos que son bien conocidos y sobre los cuales citan datos y cifras oficiales, o de organismos internacionales, que son *pan de cada día* en los medios de comunicación y entre los académicos que investigan estos problemas.

Creo que hubo cierta incompreensión del sentido de ese discurso. Es cierto que Márquez hizo alusiones muy poco diplomáticas y quizá inoportunas, pero no podemos esperar que las Farc repitan el *libreto* del gobierno y de algunos analistas.

Es la primera vez, en años, que las Farc tienen la oportunidad de decir públicamente, en un escenario internacional, lo que piensan del país y de su lucha. En un proceso como este, tener paciencia y tolerancia para escuchar a ambas partes es crucial. Es sabido que la intransigencia y la intolerancia políticas han tenido dramáticas consecuencias en la vida nacional. Basta con mencionar la Violencia de los años 50 y el exterminio de la UP.

Respecto del segundo punto de su pregunta, yo diría que la discusión sobre la cuestión agraria y el desarrollo rural del país, inevitablemente remite a la discusión del denominado modelo de desarrollo económico, como lo han señalado investigadores y analistas del sector rural. Este no es un asunto de exclusivo interés de las Farc. Los problemas del desarrollo rural colombiano ya estaban en agenda del país antes de que empezaran los diálogos. Recuérdese, por ejemplo, el Informe de Desarrollo Humano 2011 del PNUD, denominado *La Colombia rural. Razones para la esperanza*. Supongo que el gobierno Santos tiene interés en la solución



de problemas relacionados con el desarrollo rural, no solo en función de este proceso de paz, sino por el peso del sector agropecuario en la economía nacional, y por la importancia que han venido cobrando, tanto a nivel nacional como internacional, la minería y la seguridad alimentaria.

Lo importante es que por fin se está poniendo en primer plano una discusión que se había postergado por años. Si usted mira la campaña presidencial pasada, el problema agrario era casi invisible. Hoy tenemos una nueva coyuntura que pone de relieve la importancia de la redistribución de la propiedad rural y del cambio en los usos de la tierra para la solución del conflicto armado. A este respecto, hay que valorar los aportes hechos por el Informe del PNUD, no solo en cuanto al diagnóstico sino en cuanto a las soluciones a problemas estructurales del sector agropecuario, y en particular de la población campesina, incluidas las comunidades étnicas. También hay aportes importantes para la solución de estos problemas es estudios académicos como los de Absalón Machado, Darío Fajardo y Carlos Salgado, entre otros.

(J.W): Siguiendo con el tema agrario, las Farc critican la política de restitución de tierras y los movimientos de izquierda la legitimación y convocatoria del gobierno a marchas campesinas. ¿Qué retos tienen los sectores campesinos para evitar que sigan siendo instrumentalizados para los intereses de las partes en conflicto?

(R.L): No necesariamente los sectores campesinos son “instrumentalizados”. La emergencia de las organizaciones sociales rurales (indígenas, afros, campesinas, mujeres) fue previa a la agenda. No hay duda de que la Ley de Reparación de víctimas y Restitución de tierras (Ley 1448 de 2011) no es perfecta, pero

hay que valorar lo positivo de esta ley y ver la manera de superar sus deficiencias y vacíos.

En Colombia, el formalismo y el excesivo legalismo nos llevan a pensar que una Ley o un marco jurídico resuelve todos los problemas, pese a que por lo general en el país hay una brecha enorme entre lo que dice una ley y lo que realmente ocurre durante su aplicación. No se puede magnificar la Ley de Restitución. Es el primer intento que hace el Estado colombiano de hacer una reparación a las víctimas de la violencia y esto no se puede menospreciar. Están matando líderes, hay intereses privados que se oponen a la restitución; pero hay un movimiento social que puede hacer que la ley de buenos resultados, así sean parciales, y con capacidad de contribuir a una progresiva solución de problemas históricos como la inequitativa distribución de la propiedad de la tierra y la extremada pobreza en que vive una considerable proporción de los pobladores rurales.

Mi trabajo sobre la historia social y política de la región de Sumapaz me enseñó que el movimiento campesino logró defender la tierra de los colonos y los derechos de los arrendatarios de las haciendas, e igualmente sus derechos como ciudadanos, apoyándose no solo en la movilización social y política sino también en la ley y en instrumentos jurídicos.

(J.W): Hablando de su trabajo sobre la vida de Juan de la Cruz Varela y su influencia en la consolidación de un movimiento campesino. ¿Qué tan cerca o lejos estamos de volver a tener dirigentes y líderes de la estatura política de este personaje, con el fin de evitar que las disposiciones legales se queden solo en palabras?

(R.L): Son dos épocas muy distintas. El movimiento agrario de Sumapaz fue muy singu-



lar, incluso en América Latina, por su larga duración y por su capacidad de pasar de la lucha reivindicativa a la autodefensa armada cuando no tuvo otra alternativa en tiempos de la violencia bipartidista. También suscribió acuerdos de paz cuando hubo circunstancias favorables para ello. No es un modelo replicable hoy en día, pero el conocimiento de la trayectoria y las experiencias de este movimiento podría servir de inspiración a las organizaciones rurales actuales.

Hoy día se observa un renacimiento de antiguas organizaciones rurales y la emergencia de nuevas organizaciones, especialmente de aquellas que defienden derechos de las víctimas del conflicto armado, entre éstos el de la recuperación de sus tierras y demás bienes de que han sido despojados muchos pobladores del campo. Otro punto a destacar, es la conformación de la Mesa Nacional de Unidad Agraria -una alianza de organizaciones rurales que por primera vez en Colombia presenta un proyecto de ley de tierras y desarrollo rural, alternativo al que el Gobierno aspira a presentar a consideración del Congreso-. La Mesa de Unidad Agraria, a diferencia de otras experiencias de índole similar, va más allá de la protesta social y de la lucha reivindicativa: se tomó el trabajo de elaborar un proyecto de ley, basado en un *mandato agrario*, que vale la pena estudiar y discutir en público. Absalón Machado resalta el hecho de que mientras en el Caguán las partes no tenían ninguna propuesta de solución de los problemas agrarios, en esta ocasión tanto el Gobierno como las Farc y las organizaciones rurales tienen propuestas. También las hay de ONG como Planeta Paz. Cabe recordar que en la época del Caguán las organizaciones rurales estaban debilitadas y la movilización campesina estaba muy atomizada.

Por fortuna, hoy contamos con un espacio para discutir distintas propuestas sobre

la cuestión agraria. Ojala se logren acuerdos que permitan soluciones efectivas en el mediano plazo.

(J.W): Usted ha hablado de un movimiento campesino que está construyendo propuestas, pero: ¿Dónde están los partidos políticos y otros movimientos sociales que no aparecen todavía con el protagonismo que se esperaría en un momento clave para el país?

(R.L): La ausencia de los partidos políticos en esta discusión, y en otras, y del sector sindical urbano, es de larga data. Se requiere establecer hilos conductores entre el ámbito político, las organizaciones sociales y los gremios, para crear un clima favorable a las reformas sociales y económicas que requiere el país. Insisto, la agenda del Gobierno y las Farc no resuelve todos los problemas nacionales. Pero si se llega a un acuerdo, para su materialización se requiere un sólido respaldo ciudadano.

En mi opinión, este es un momento para escuchar los argumentos de las partes. No conviene echarle leña al fuego, no podemos exigirle a la agenda Gobierno-Farc lo que nos toca construir como sociedad. Una reforma de envergadura del campo colombiano, no se hace con un acto legislativo, éste solo da algunos instrumentos para ello. Se necesita el fortalecimiento del aparato estatal, de cuantiosas inversiones públicas y privadas, el fortalecimiento de la organización social de los habitantes rurales, y el apoyo de la sociedad en su conjunto, para que estas reformas sean viables y puedan ejecutarse.

(J.W): Para finalizar, la acción política podría contribuir a esa movilización social. En ese sentido ¿Considera clave el papel de la alcaldía de Gustavo Petro para generar la confian-



za en el proceso de paz y en la posibilidad de generar procesos de reconciliación?

(R.L): Es importante y aun más en este momento en que algunos columnistas y periodistas estigmatizan a Petro por haber sido un líder guerrillero. Sin embargo, hay analistas que han expuesto críticas bien fundamentadas a esta administración; con razón, le critican al alcalde Petro el que no sabe escuchar. No hay duda de que Petro tiene una tremenda responsabilidad política con los sectores *progresistas* y de izquierda que han buscado y siguen buscando la inclusión social y la participación política de sectores que por diversas razones han sido excluidos de los beneficios sociales o de la participación en la política nacional o local.

Ciertamente, cuando un gobierno de izquierda llega al poder ejecutivo no puede limitarse a administrar bien y honradamente los recursos públicos. Es legítimo hacer propuestas y tomar decisiones que van más allá de mantener la continuidad de programas de gobiernos anteriores, o de ser “buenos gerentes”. En esto Petro tiene razón. La alcaldía es un cargo político, no es un cargo meramente técnico. El Alcalde, quienquiera que sea, cuenta con un equipo burocrático cuya capacidad técnica y gerencial depende, obviamente, de los criterios de selección y de los intereses políticos del gobernante.

En el caso de Petro, creo que le ha faltado claridad en sus metas de gobierno, y realismo en lo que puede hacer en cuatro años. En cuatro años no se puede cambiar totalmente una ciudad. No creo que sea conveniente ignorar programas de gobiernos anteriores que han mostrado resultados positivos para la gente y para la ciudad. Es sabido que re-

formar las instituciones y cambiar el rumbo de una ciudad toma tiempo y exige tacto y paciencia. Creo que se requiere un equilibrio entre la inercia institucional y la intención de cambio. Una lección que también sirve para este proceso de paz que comenzó recientemente en la Habana.

La impresión que tengo es que los tres gobiernos de *izquierda* en Bogotá han fallado en la capacidad de traducir en la práctica sus propuestas programáticas, algunas de las cuales no son particularmente novedosas, así se les cambien las denominaciones. Hay cambios que toman mucho tiempo en madurar y cuajar. Por ejemplo, Antanas Mockus y sus dos equipos de gobierno pensaron a Bogotá no solo en el corto plazo sino en el mediano plazo. Y dentro de esa visión se proyectó lo que era realizable en tres años. No estoy diciendo que Petro debe seguir el modelo de Mockus, pero usted no puede someter a la ciudad a un ritmo de cambios estructurales que no son viables en el corto periodo de una administración.

Lo que yo veo en Petro, a pesar de que tiene propuestas progresistas, es que cada semana quiere cambiar aspectos fundamentales de la ciudad y esto no lo puede hacer en el corto plazo, así tuviera un aparato técnico excepcionalmente bueno. Es de esperar que después de este año traumático, el alcalde Petro logre centrar su gobierno en la ejecución de proyectos fundamentales de su plan de desarrollo, y que además tenga más tacto en su comunicación con la ciudadanía.

Si se lograra enderezar el rumbo de la actual administración de Bogotá, sería muy positivo, no solo para el porvenir de la izquierda y de los *progresistas*, sino de la ciudad y sus habitantes.

